

La minoría que quiere gobernar y su relato

JOSÉ MANUEL NAVARRO LLENA

Hay momentos en los que una sociedad deja de discutir sobre los problemas reales para acalorarse por las emociones que la tergiversación

de esos problemas

provoca. Entonces

los políticos descubren que resulta

mucho más sencillo

administrar el

miedo, la indignación o el

resentimiento

que explicar

la complejidad

de aquello que se pretende

resolver. España

parece mantenerse en uno

de esos territorios

de penumbra en los que

la realidad se

sustituye por una

manipulada representación.

Hablemos de las

heurísticas del poder, esos

atajos mentales mediante

los cuales simplificamos

la realidad para tomar

decisiones rápidas que

son usados por el poder

para no convencer desde

el plano racional, sino con

la gestión de las

emociones que infantilizan

a la ciudadanía y reemplazan

el debate democrático

por una respuesta refleja,

condicionada. Nos

gobiernan mediante

sesgos, presentando la

complejidad institucional

reducida a binomios

maniqueos: el bien frente

al mal, derecha contra

izquierda, acomodados

frente a vulnerables,

—ahora— propietarios

contra inquilinos, la

narrativa frente a la

legalidad... La

argucia política es

que quien controla el

relato termina imponiendo

su verdad, aunque los

hechos sean otros o

mucho más incómodos.

Así, se nos vende

que las protestas contra

los desahucios son un

nuevo 15M, una

renovada ola de «indignación»

para sacudir la

conciencia de políticos

y especuladores. Pero

a aquel 15M de hace

quince años el futuro

le pasó de largo. Fue

movimiento transversal,

descentralizado,

apartidista y espontáneo

conformado por

personas de toda

condición y

procedencia, cansados

e indignados por la

crisis económica,

la corrupción política

y la ausencia de

liderazgos honestos.

El resultado fue

que nos convertimos,

una parte importante,

en «indignados

decepcionados»

pues habíamos

confiado en una

renovación política

que terminó

convertida en una

nueva forma de

poder y en el

aprovechamiento

particular de

algunos

representantes

avispa-

dos, que aún

siguen

exprimiendo

un

discurso

manido y

trasnochado.

Los actuales

indignados—

aparentes—

ejemplifican

que si una

sociedad

deja de

contrastar

la

información

acaba

siendo

débil

frente

al

poder

de

quienes

saben

activar

sus

emo-

ciones.

Los

desahucios,

todos

y no

solo

los

mediáticos,

son

un

problema

cierto

y

doloroso

que

no

deriva

de

la

funesta

decisión

de

los

propietarios

que

cumplen

con

la

legalidad,

sino

de

las

inexistentes

políticas

de

vivienda

del

gobierno,

de

la

precariedad

salarial,

de

la

sobrepresión

fiscal

y

tributaria

a

las

empresas,

de

la

ausencia

de

incentivos

e

infinita

burocracia

para

las

constructoras

y,

en

definitiva,

de

un

modelo

económico

inexistente

salvo

para

ser

maquillado

con

incrementos

de



Imagen creada con IA.

un PIB engrosado por un imparable gasto público y por el endeudamiento de una población creciente que, paradójicamente, dispone de una menor renta per cápita disponible.

No es casual que los líderes de los indignados actuales apliquen la «regla de las minorías» descrita por N.N. Taleb, quien sostiene que una minoría pequeña, cuando es suficientemente firme e intolerante con determinadas prácticas, puede terminar imponiendo sus preferencias al conjunto de la sociedad y transformar el comportamiento colectivo; basta con que tengan capacidad para condicionar el sistema aprovechando la debilidad del gobierno y la ambición de su presidente. La paradoja española es que esa regla puede funcionar tanto para proteger derechos como para manipular la democracia. Una minoría organizada puede ser imprescindible para que una sociedad avance; también puede convertirse en un mecanismo de presión cuando presenta su propia visión como la única expresión legítima del interés general.

Precisamente por eso resulta peligroso convertir un problema estructural, que los últimos gobiernos no han sabido/querido resolver, en una batalla moral entre buenos y malos en la que, por un lado, ciertos movimientos ideológicos y sindicales estrechamente vinculados a la órbita de la izquierda controlan o influyen en cooperativas de vivienda y estructuras del sector y, por otro, alientan de manera hipócrita protestas estridentes que demandan soluciones intervencionistas. Estas medidas, lejos de resolver la escasez de vivienda, intimidan al pequeño propietario, estrangulan aún más la oferta y reducen el mercado del alquiler a la mínima expresión.

El uso mediático y torticero de casos particulares de desahucio, elevados a categoría sistémica, ocultan la casuística jurídica real de cada expediente respondiendo a una planificación política deliberada para incendiar las calles. No se busca proteger la vulnerabilidad social con rigor técnico ni con

garantías habitacionales estables, sino instrumentalizar el dolor humano para crear un clima de «pre-insurrección». Es la vieja táctica de fabricar culpables a la carta para justificar la erosión de la seguridad jurídica, usando un lenguaje en el que predominan el cinismo, la mentira, la hipocresía y la persuasión ideológica para imponer una superioridad moral desposeída de ética.

La comparación con el 15M resultará inequívoca pues sabemos cómo aquel movimiento fue aprovechado por personajes cuyo liderazgo estaba sustentado en ambiciones personales en las que no cabía—ni cabe—la defensa real de los vulnerables e indignados auténticos. El intento de aplicar un nihilismo activo a un momento crítico, como fue el lustro 2008-2013, quedó—como quedará la voluntad de los acampados—en la disolución de las ideas en un entramado de voluntades individuales que no pretenden la regeneración democrática, sino servir de managers dirigiendo al colectivo que secunda el relato gubernamental—en fase terminal—.

Permitir que el atajo heurístico y la mentira institucional se adueñen del espacio público equivale a entregar los cimientos de nuestra convivencia a quienes solo entienden el Estado como un botín y la sociedad como un rebaño manipulable. En semejante escenario, España necesita exactamente lo contrario de una política basada en heurísticas. Necesita la valentía para distinguir hechos de relatos, delitos de sospechas, víctimas reales de símbolos políticos, propietarios de especuladores, manifestantes de militantes y adversarios de enemigos.

Cuando una minoría consigue imponer su relato y la mayoría deja de cuestionarlo, la democracia conserva sus urnas, sus instituciones y sus leyes, pero pierde la capacidad de controlar un presente en el que no haya que elegir entre dos trincheras y pueda recuperar la honestidad de los hechos, el respeto a la legalidad y la libertad de cada ciudadano para pensar y decidir por sí mismo.